



## DECLARACIÓN POLÍTICA

# Tierra para la vida, los medios de subsistencia y un futuro habitable para todos

Cartagena, Colombia

23 de febrero de 2026

Nosotros, organizaciones campesinas, Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes, pescadores, pastores, trabajadores rurales y urbanos, mujeres, personas de género diverso y jóvenes, organizados a través del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, nos reunimos en Cartagena los días 22 y 23 de febrero, antes de la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20). Alzamos una voz colectiva para la transformación en defensa de los territorios, la vida y la dignidad. Recordamos a los Estados aquí reunidos que la soberanía nacional es inseparable de la soberanía alimentaria, y les pedimos que luchan junto a nosotros contra las fuerzas imperiales que buscan destruir nuestro derecho a ambas.

El imperialismo financiero —en sus formas contemporáneas de gestores de activos, fondos de cobertura, empresas transnacionales y agroindustria extractiva— está intensificando el despojo de las masas populares del Sur global y de los Pueblos Indígenas y pequeños productores del Norte global en todas partes. La concentración y el acaparamiento de tierras y territorios no es una anomalía: es el resultado lógico de siglos de colonialismo, imperialismo, capitalismo, racismo y patriarcado. El 1 % de las granjas controla más del 70 % de la tierra cultivable del mundo, mientras que en las aguas de los pueblos, las políticas de «crecimiento azul» amplían el control privatizado sobre los espacios marinos y de agua dulce. Además, la deuda y la austeridad impuesta por el FMI crean un círculo vicioso que atrapa a los países en una agricultura de exportación ecológicamente destructiva, mientras que, a nivel doméstico, las microfinanzas depredadoras se dirigen de manera desproporcionada a las mujeres y las despojan de sus tierras y medios de vida. Los modelos de desarrollo descendentes y la ayuda exterior colonial han consolidado la lógica de la dependencia en lugar de apoyar la autonomía de los pequeños productores de alimentos en todo el Sur. Esta realidad

material es el punto de partida de cualquier análisis honesto y la base de cualquier demanda de cambio real.

La ofensiva no es solo geopolítica, es una guerra de clases por la tierra, el agua, los bosques, los minerales, la biodiversidad y los sistemas alimentarios. Consolida el control de las empresas y las élites mediante el despojo, la militarización, el endeudamiento y las sanciones, así como la criminalización de quienes defienden nuestros territorios. La tierra y sus criaturas se ven perjudicadas por la incursión implacable de la exploración y extracción minera, que perturba la migración de peces, manadas y aves, con efectos devastadores para los pastores y pueblos nómadas, algunos de los últimos defensores de los bienes comunes. La agresiva política de la administración imperialista de Washington —que profundiza el bloqueo y la asfixia económica criminal de Cuba, desestabiliza sistemáticamente a Venezuela, presiona a Colombia cuando esta afirma su soberanía, lanza guerras comerciales y sanciones coercitivas contra los pueblos de África, Asia y el Levante— no es la política de un solo gobierno, sino que se ve fortalecida por la complacencia mundial.

En este panorama general, la cuestión palestina destaca como el símbolo más brutal y evidente de la barbarie colonial-imperialista de nuestro tiempo. Lo que está sucediendo en Gaza y Cisjordania no es una «crisis humanitaria» abstracta surgida de un vacío histórico: es el genocidio de un pueblo que lleva décadas resistiendo la ocupación, perpetrado por un Estado colonial que sirve de avanzada militar al imperialismo estadounidense en la región. Declaramos nuestra solidaridad internacionalista incondicional con el pueblo palestino y rechazamos enérgicamente cualquier intento de criminalizar esta solidaridad. Exigimos el fin inmediato del genocidio, la retirada total de los territorios ocupados, el derecho al retorno, la soberanía alimentaria y la plena autodeterminación del pueblo palestino.

La región de América Latina y el Caribe está experimentando simultáneamente importantes avances populares y una contraofensiva reaccionaria organizada, financiada e ideológicamente respaldada por el imperialismo: golpes de Estado institucionales, campañas de desinformación, guerras legales contra gobiernos progresistas y violencia directa contra organizaciones populares. El auge de las fuerzas de extrema derecha en el continente refleja el pánico de clase de las élites ante el crecimiento de los movimientos populares, y su recurso a la barbarie cuando los mecanismos habituales de dominación ya no son suficientes. Ante esto, Venezuela y Cuba resisten el bloqueo imperial y mantienen su soberanía.

La celebración de la CIRADR+20 en Colombia tiene un profundo significado político. Se trata de un país marcado por la extrema concentración de la tierra y la riqueza, la violencia y el conflicto armado vinculado al control territorial, pero también por poderosas luchas agrarias y movilizaciones organizadas que exigen la redistribución, la restitución y el reconocimiento. Este momento representa una oportunidad histórica para que los Estados se comprometan con una reforma agraria integral y el desarrollo rural. No aceptaremos una conferencia meramente conmemorativa o declarativa. Venimos a transformar.

La reforma agraria que reclamamos es un proceso de transformación de las relaciones de producción y de poder, liderado por las masas populares organizadas. La reforma agraria debe ser inclusiva, emancipadora y estar arraigada en la diversidad de la vida rural en todas las regiones del mundo, incluido el Norte global. Debe proteger los complejos sistemas de tenencia y medios de vida, los sistemas de producción tradicionales y las semillas autóctonas e indígenas como base de la

autonomía y la soberanía de los pueblos, así como valorar los conocimientos, las prácticas y las innovaciones locales, y evitar que se repitan las exclusiones de los pueblos indígenas, los campesinos, los pescadores, los pastores nómadas, las comunidades afrodescendientes, las mujeres y otros grupos marginados. La reforma agraria debe promover la agroecología, la justicia social, la solidaridad y la coexistencia de los titulares de derechos.

La reforma agraria debe ser feminista e intergeneracional. Las mujeres rurales protegen las semillas, los conocimientos ancestrales y las economías locales, pero ellas, junto con los jóvenes rurales y las personas de género diverso, suelen quedar excluidas del control y la herencia de la tierra, así como de la toma de decisiones. Las economías feministas se enfrentan a las relaciones de poder abusivas y rechazan el modelo productivista que trata a la Madre Tierra como un mero recurso. Reconocen los territorios como espacios vitales compartidos por diversas especies, pueblos y generaciones que trabajan por el bienestar colectivo. Todas las formas de vivir y amar son válidas. Sin cuerpos libres, no hay territorios libres. Por eso nos comprometemos políticamente a crear espacios seguros y dignos dentro de nuestros movimientos y comunidades. Defender el territorio es defender los ciclos de cuidado y renovación que sustentan la vida.

La reforma agraria debe reconocer y proteger los derechos colectivos y consuetudinarios, garantizar el consentimiento libre, previo e informado, establecer límites claros a la concentración, aplicar impuestos progresivos a las grandes propiedades y redistribuir las tierras que no cumplan su función social y ecológica. Debe rechazar el acaparamiento verde y azul, que no son más que nuevas formas de despojo disfrazadas de «soluciones basadas en la naturaleza».

Es innegable que cuando los derechos son precarios y la riqueza está concentrada, la inestabilidad se agrava. Una transformación rural justa y sostenible no es un ideal lejano, sino la condición material para cualquier paz real y estabilidad a largo plazo. El reconocimiento de los sistemas de tenencia colectiva y consuetudinaria protege los ecosistemas y reduce los conflictos. La redistribución de la tierra, el agua y el poder de decisión restaura la cohesión social y la resiliencia de las economías locales, pero debe ir acompañada del fortalecimiento de las infraestructuras de procesamiento y distribución controladas por la comunidad, junto con mecanismos de fijación de precios justos. La restitución y la reparación a las comunidades desposeídas, enmarcadas en mecanismos basados en los derechos, reconstruyen la confianza y reparan el daño histórico. La regulación de la concentración de la tierra —mediante límites a la propiedad, impuestos progresivos y una planificación del uso de la tierra participativa y sensible al género— protege los bienes comunes de la especulación, así como las semillas autóctonas y campesinas del control corporativo, para garantizar que permanezcan en manos de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los pastores. En conjunto, estas transformaciones constituyen la arquitectura de una sociedad capaz de capear la crisis climática y las crecientes desigualdades sin caer en la violencia y la desintegración social.

No se trata de una visión utópica: es la necesidad histórica de nuestro tiempo. El hambre en el mundo no se debe a la escasez, ya que producimos lo suficiente para alimentar al doble de la población humana. Se debe a la especulación y la concentración, respaldadas por un gobierno antidemocrático. Sin una reforma agraria popular integral, el hambre no tendrá fin. Sin justicia agraria, no habrá paz.

Ningún pueblo puede enfrentarse solo al imperialismo. La respuesta a una ofensiva global debe ser la solidaridad y la resistencia internacionales. Hacemos un llamado al fortalecimiento de la articulación internacional de los movimientos campesinos, indígenas, laborales, feministas y juveniles, más allá de las fronteras que el imperialismo busca hacer infranqueables. Hacemos un llamado a los Estados que participan en esta Conferencia para que asuman su responsabilidad histórica mediante compromisos concretos y vinculantes, no declaraciones de intenciones. Las potencias coloniales y los países del Norte global tienen la obligación de rendir cuentas por sus formas históricas y actuales de acaparamiento de tierras, violencia y opresión mediante la restitución de tierras y reparaciones. La historia no juzga las buenas intenciones, juzga las transformaciones reales. No nos hemos reunido aquí para conmemorar. Nos hemos reunido aquí para transformar.

Para que la ICARRD+20 sea un momento decisivo, esperamos que los Estados cumplan con su responsabilidad y asuman compromisos concretos. Esto incluye desarrollar e implementar políticas de reforma agraria y desarrollo rural a nivel nacional con la participación autónoma y efectiva de los titulares de derechos. Estas políticas deben integrar sectores clave, como la alimentación, la agricultura, la pesca, la salud, la minería, el clima, la energía, el comercio y las finanzas. Además, esperamos que los Estados establezcan mecanismos sólidos de supervisión y rendición de cuentas a nivel internacional, llevando los resultados de la conferencia a los espacios de las Naciones Unidas, entre ellos la FAO, el FIDA, el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las Convenciones de Río, la UNCTAD y el PNUD, entre otros.

Cada generación de líderes es juzgada por lo que deja tras de sí. En nuestra época persisten el hambre y la desnutrición, los territorios marinos están subiendo para engullir tierras preciosas, dejando a los pueblos indígenas y a los pequeños productores de alimentos, desde Fiyi hasta Bangladesh, sin medios de subsistencia ni justicia. En esta época de desigualdad cada vez mayor, defender los privilegios concentrados no es un liderazgo responsable.

Garantizar que la tierra, los territorios, los bosques, el agua y la biodiversidad sirvan al bienestar social y ecológico general no es radical: es un derecho de los pueblos, una obligación de los Estados y algo necesario para la estabilidad compartida y el bienestar colectivo. Como movimientos sociales que representan a miles de millones de pequeños productores de alimentos en todo el mundo, venimos aquí comprometidos a alzar nuestras voces, expresar nuestras soluciones y trabajar con los Estados en favor de una reforma agraria que garantice la vida, los medios de subsistencia y un planeta habitable para todos.

¡Contra el imperialismo, solidaridad internacional!

¡Contra el genocidio, Palestina vivirá!

¡Contra el extractivismo, soberanía alimentaria y agroecología!

¡Contra el despojo, tierra para quienes la trabajan y la cuidan!

¡Contra el miedo, organización, lucha y victoria para los pueblos!